

# Democracia gobernable: instrumentalismo conservador\*

Beatriz Stolicz

## Resumen

Los debates sobre la democracia no pueden eludir una respuesta al hecho de que cuanto más ésta se "consolida", peor vive la gente. Lo que puede parecer una paradoja en realidad muestra que, tanto en las concepciones como en las prácticas políticas, predomina una concepción de democracia afin con los objetivos excluyentes de la dominación capitalista neoliberal: la democracia gobernable. Estas visiones y prácticas permean, incluso, el accionar de los partidos de izquierda en América Latina, que no obstante su creciente presencia política e institucional, quedan condicionados a una lógica política que debilita su potencialidad transformadora. Tras discutir las relaciones teóricas e históricas del marxismo y el liberalismo con la democracia, el trabajo encara teórica, histórica y políticamente el proceso por medio del cual la democracia gobernable, que es un método de control social y político, se ha impuesto como la democracia "realmente existente". También se abordan sus contradicciones y la crisis que atraviesa hoy América Latina.

## Abstract

The discussions on the democracy can not avoid to give response to the fact that while it is "consolidated", people live worse. What can seem a paradox, in reality shows that, in the conceptions as well as in the political practice, prevails a related democracy conception with the excluding objectives of the neoliberal capitalistic domination: the governable democracy. These visions and practical permeate, even, to trigger it of the left parties in Latin America, that nevertheless their growing political and institutional presence, remain conditioned to a political logic that weakens their transforming potential. After discussing the historical and theoretical relationships of the marxism and the liberalism with the democracy, this work faces theoretical, historical and politically the process in which the governable democracy, that it is a method of political and social control, it has been imposed as the democracy "actually existing". Also are approached their contradictions and the crisis that crosses today Latin America.

No hay tema de reflexión más permanente que el de la democracia, porque su desarrollo es un proceso histórico siempre inacabado. Pero en América Latina, donde desde los años noventas por primera vez todos los países tienen regímenes democrático-liberales, el tema padece de síntomas paradójicos: cuanto más se consolida la democracia peor vive la gente, y cuanto más se reflexiona sobre el asunto menos se aclara por qué. Los análisis no pasan de las descripciones sin explicaciones, pues los parámetros conceptuales que se presumen como adecuados no concuerdan con la realidad. Para quienes comulgan de manera complaciente con esta realidad, el problema ni siquiera existe porque niegan en la democracia atributos de desarrollo social. Entre quienes sí creen en esos atributos, muchas de sus críticas a "esta" democracia no llegan a superar el plano

\* Este trabajo fue presentado como ponencia en el II Seminario Internacional Marx Vive, "¿Qué capitalismo? ¿Cuál alternativa?", realizado en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 8-10 de noviembre de 2000.

ético, de denuncia, y las alternativas que se piensan en la práctica no lo son, pues quedan en la dimensión cuantitativa de "más o menos de lo mismo".

La democracia como problema no es una novedad, pues es inherente a la contradicción entre capitalismo y democracia, entre desigualdad social e igualdad política, que ha marcado la historia no sólo del debate sobre la democracia sino su propia realización. Pero hoy plantea a los latinoamericanos desafíos analíticos y políticos inéditos, cuando esa contradicción adquiere rasgos antitéticos, pues la noción de mayorías es asimismo la de exclusión. Nunca ha tenido mayor vigencia la identificación del desarrollo de la democracia con la superación del capitalismo, pero a la vez nunca había sido tan urgente construir caminos de avances democráticos en este capitalismo salvaje, porque hacen a la sobrevivencia misma de la gente.

Lo que no constituiría nada extraordinario para una visión dialéctica de la realidad, se ha convertido hoy en nudo gordiano para quienes se proponen transformarla, ya que el tema de la democracia es una de las zonas oscuras del pensamiento social y político latinoamericano, en el que se constata el carácter dominante de las ideas de quienes dominan en la sociedad, lo que dice, obviamente, de las insuficiencias del pensamiento crítico en nuestra región. Esta es una razón suficiente para reflexionar sobre la forma en que se ha impuesto la concepción más conservadora de la democracia liberal como la noción general de democracia, que ha permitido dar legitimidad política y aceptación ideológica al orden social más antidemocrático que haya existido en la época moderna de nuestra región. Tarea nada sencilla en pocas páginas, cuando a la vez tenemos que analizar la crisis creciente de esa democracia sin que haya una crisis equivalente de las ideas dominantes.

### **Marxismo latinoamericano y democracia**

Desde hace algunos años, en América Latina escuchamos la afirmación –incluso desde sectores izquierdistas– de que la izquierda de nuestro continente nunca ha sido consecuentemente democrática, ya que, se dice, bajo influencia del marxismo ha tenido una visión instrumentalista de la democracia, y que sería hasta muy recientemente, con su renovación ideológica (el abandono del marxismo), cuando habría conquistado esa virtud al considerar la democracia como un fin en sí mismo. Esta afirmación es refutable por múltiples razones.

Si algo ha caracterizado al marxismo, desde sus orígenes, es la identificación de la *democracia* con la *emancipación humana*, como un *fin* en perpetuo discutir que para realizarse requiere, como condición y como desarrollo, la igualdad social. Por ello, el socialismo se constituye en la utopía democrática más radical, que busca la construcción de "una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos" (*Manifiesto del Partido Comunista*).

Pero en la perspectiva emancipadora (democracia como fin), la democracia, en tanto que un tipo de relaciones políticas, también es un medio para transitar

ese camino y no habría por qué atribuirle un sentido peyorativo a la noción de instrumento político. El emotivo reconocimiento de Marx a la Comuna de París, como un bello intento popular de construcción democrática dentro del capitalismo, atestigua esta visión dialéctica de emancipación-instrumento político o fin-medio, y que con una enorme riqueza, aún bastante incomprendida, elaborará Gramsci.

La democratización de una sociedad se mide por la capacidad que tienen las mayorías para decidir con autonomía sobre su presente y su futuro. La conquista de esa capacidad de decisión, que requiere de y produce mayor igualdad social, hace necesario —entre otros cambios— transformar las condiciones y los espacios formales y no formales de institucionalización del poder con los que se reproduce la subalternidad. Pero la acción en ese nivel específico de la política, para ser realmente democratizadora, no es cualquier lucha política sino la que reintegra economía y política, la que reduce la escisión entre el “productor” y el “ciudadano”, la que reduce su desigualdad.

Ambos, *una participación con verdadera capacidad de decisión y una mayor igualdad*, son los dos elementos de carácter vinculante entre democracia como fin y como medio. En ambos está implícito un problema ético, el de los valores y las prácticas democráticas, pero en ambos también se plantea un problema de poder, de relaciones de poder. Quienes cuestionan déficits en la izquierda en el primer aspecto (que los hay), pero eluden el segundo, tampoco están pensando en construir democracia.

El supuesto “instrumentalismo” de la izquierda latinoamericana no logra sostenerse ni por su experiencia histórica ni por sus concepciones teóricas.

Se debe empezar por decir que, a pesar de la gran heterogeneidad de visiones ideológicas, experiencias organizativas, influencia política y modos de acción, por sus valores y fines de lucha por la emancipación y la igualdad la izquierda latinoamericana ha sido siempre una fuerza esencialmente democrática. En una región en la que el desarrollo capitalista relativo de algunos países representó mejoras en las condiciones de vida sólo para algunas fracciones urbanas modernizadas y mantuvo en la marginación a millones de campesinos e indios, el contenido anticapitalista y antimperialista de la lucha de la izquierda tuvo un profundo carácter democrático.

En términos de su experiencia histórica, difícilmente se podría caracterizar a la izquierda como “instrumentalista” respecto a la democracia liberal cuando ésta ha sido excepcional como modalidad real de la política en la región. Fuera de algunos países como Chile, Uruguay y Costa Rica, antes de la década de los setentas, la política latinoamericana transitó por regímenes autoritarios —algunos de ellos de tipo corporativo— o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que el discurso liberal fue francamente conservador. Por el contrario, fueron los contextos no democrático-liberales los que abonaron en amplios sectores de la izquierda la negación de la democracia burguesa como instrumento y el peso de las prácticas políticas por otros medios, desde las guerrillas (desde antes, pero más todavía después de la Revolución Cubana), hasta acciones políticas

marginales e incluso lógicas corporativas. Tal vez las únicas izquierdas que tuvieron una más clara experiencia de acción política en el marco de la democracia liberal fueron la chilena y la uruguaya (con sus propias heterogeneidades internas), en las que su estrategia de constitución de sujetos sociales con independencia de clase y objetivos políticos anticapitalistas profundizó el desarrollo más democrático de esos sistemas políticos. Si hubo instrumentalismo, indudablemente éste tuvo el sentido de cambio que lo articula a la democracia como fin. En esas experiencias nacionales no fue el accionar de la izquierda lo que debilitó la institucionalidad democrática; por el contrario, fueron los sectores dominantes los que la destruyeron ante la imposibilidad de seguir utilizando el régimen representativo para reforzar la dominación y los valores capitalistas.

Tampoco por su concepción teórica puede atribuirse un instrumentalismo democrático a la izquierda latinoamericana. Fuera de esas excepcionales experiencias políticas en el marco del sistema representativo, la izquierda latinoamericana no desarrolló una concepción autónoma de la democracia como medio. Y esto, más que una virtud es en realidad una enorme debilidad que explica en parte las limitaciones que exhibe hoy la izquierda de toda la región al tener que hacer política en el marco de la democracia liberal actual.<sup>1</sup>

No hubo teorización de la democracia política como un escenario específico de la lucha de clases, como *medio de cambio*, con la que se confrontara teórica y políticamente la visión dominante de la democracia como *medio de conservación*. Los marxistas latinoamericanos carecieron de una visión alternativa a la justificación teórica e ideológica y al modelo práctico que elaboró ampliamente la burguesía para construir equilibrios en sociedades de conflicto de clase, pues desecharon la sociología política como campo de conocimiento científico mediante el simple trámite de considerar a la sociología como una ciencia burguesa, dejando al estructural-funcionalismo la hegemonía. Fueron excepcionales los dirigentes políticos y muy pocos los intelectuales de la izquierda que conocieron y entendieron los aportes gramscianos en esta materia. Aunque la obra de Gramsci fue publicada en América Latina antes que en varios países europeos, esto ocurre hasta la década de los sesentas (siendo una de las pioneras la revista cubana *Pensamiento Crítico*), y fue una literatura muy marginal.

Salvo excepciones, la producción intelectual se concentró en los problemas del Estado, con una visión economicista de la superestructura como "reflejo", sin analizar el vasto problema de la dominación y de las mediaciones. Fueron en general visiones reduccionistas del Estado a su carácter de aparato de clase —muy distantes de la perspectiva marxista que lo considera como cristalización de las relaciones de fuerza existentes en la sociedad— perdiéndose la riqueza analítica marxiana de la *autonomía relativa del Estado*, o del *Estado ampliado* o *bloque histórico* gramsciano, que analiza el ejercicio de la dominación (*hegemonía*) aten-

<sup>1</sup> Aun en las que hubo un mayor desarrollo de una concepción autónoma de la democracia como medio, se observan desaprendizajes que dicen de regresiones que merecen un análisis especial del peso de las derrotas políticas en sus conceptualizaciones actuales.



diendo a los fenómenos institucionales e ideológicos, no sólo como “reflejo” sino como escenarios de la lucha de clases que poseen una fuerza material en la organización de las relaciones de poder. Esas ausencias teóricas explican la escasa atención al problema de los intelectuales, y muy específicamente al papel de la Universidad pública, en lo que, con muy escasas excepciones,<sup>2</sup> la izquierda latinoamericana tampoco elaboró una visión teórica y estratégica propia.

Por *propio* no aludo solamente a la independencia ideológica de clase, sino también a la especificidad latinoamericana como sustrato sociohistórico de la conceptualización de las categorías de análisis. La gran excepción es el aporte de los científicos sociales marxistas a la teoría de la dependencia, que poco o casi nada influyó en las concepciones partidarias.<sup>3</sup>

Sin embargo, la llamada renovación ideológica que exhiben con orgullo muchos sectores de la izquierda no ha producido una superación de esas carencias teóricas originadas en un marxismo dogmático y frecuentemente vulgarizado por los partidos. Por el contrario, al negar el marxismo, estos sectores sucumben a las visiones hegemónicas del liberalismo, siendo incapaces de distinguir entre el discurso universal-abstracto de la democracia liberal y su realización histórico-concreta como ejercicio de dominación capitalista. Cuando la izquierda latinoamericana descubre a la democracia, en realidad descubre a la *democracia gobernable*, la realización histórica más conservadora de la democracia liberal. En una desnaturalización teórica adicional, su creciente adscripción a las visiones del estructural-funcionalismo y a las teorías liberales pluralistas los inhabilita para entender los problemas de la dominación y el poder desde el marco institucional. Y cuando creen descubrir una visión más compleja del Estado, lo hacen bajo la dicotomía liberal que autonomiza política de economía, con la paradoja de que ello les sucede cuando el Estado neoliberal latinoamericano exhibe la mayor regresión en términos de autonomía relativa respecto al poder de clase.

Esas carencias analíticas, que impiden a la izquierda enfrentar teórica y prácticamente su nueva realidad de amplia presencia institucional con la autonomía necesaria para convertirla en factor de cambio, nada tienen que ver con la crisis del socialismo. Son problemas y carencias propias, de larga data, que en lugar de ser asumidas críticamente, han pretendido resolverse “tirando al niño con el agua de la tina”. La tragedia convertida en farsa: la izquierda no se “renueva” por haber aprendido de la dolorosa experiencia para avanzar teóricamente, sino

<sup>2</sup> Entre esas excepciones destacan las teorizaciones sobre los intelectuales y la universidad de Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista de Uruguay y Clodomiro Almeyra, secretario general del Partido Socialista de Chile, sin olvidar los aportes de José Carlos Mariátegui varias décadas antes.

<sup>3</sup> También hay un importante aporte marxista a los estudios de las historias nacionales de América Latina, aunque muchos carecen de elaboraciones teóricas para replantear la unidad de análisis del modo de producción en la perspectiva de las especificidades del capitalismo latinoamericano. Varias generaciones de izquierdistas desconocen el libro pionero de Sergio Bagú, *Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina*, publicado por primera vez en 1946 y reeditado en 1992 en México (por Grijalbo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes).

por haber sucumbido a la hegemonía prácticamente incontestada de la ideología del capitalismo más puro y duro.

### Liberalismo y democracia

La asimilación de democracia liberal a democracia en general ("sin adjetivos") que hoy predomina, se ha construido sobre la mitificación del liberalismo como la doctrina democrática por excelencia. Esa tergiversación de la historia obliga a las siguientes precisiones:

1. El liberalismo, en tanto proyecto político de la burguesía, no nació como una doctrina democrática; entre uno y otra hay un desfase temporal de más de un siglo y medio. El Estado liberal (formación de gobierno por elección, parlamento y división de poderes) no nació como Estado democrático.

2. La democracia apareció como problema histórico cuando se hizo evidente la contradicción entre el discurso universalista del liberalismo y la desigualdad social real, misma que la burguesía no atacó con su propia emancipación política pero que sí reprodujo, bajo nuevas condiciones, al convertirse en clase dominante.

3. Cuando la burguesía liberal comenzó a encarar el problema de la democracia no lo hizo como un fin en sí mismo, sino como un instrumento político para regular la participación de los dominados que presionaban para decidir sobre los asuntos públicos. La máxima liberal de "un hombre, un voto", como realización de la emancipación política del individuo, tenía como destinatarios a los propietarios y fue puesta en práctica con un modelo político en realidad oligárquico —la democracia censitaria— referido a una *sociedad civil* excluyente: la soberanía popular no incluyó en el universo ciudadano a los no propietarios, las mujeres y los jóvenes. La ampliación de este universo soberano, como sabemos, no ha sido virtud de la burguesía liberal sino conquista de los excluidos. Por el contrario, aquella consagró la exclusión en un constitucionalismo conservador reificado con el desplazamiento de la soberanía al imperio de la ley "justa por naturaleza". Sólo cuando el capitalismo monopolista requirió del Estado nacional, la burguesía fue proclive a considerar las demandas de sufragio universal<sup>4</sup> para los varones. Finalmente este fue concretado ya para terminar el siglo XIX y para las mujeres fue conseguido muchas décadas después.

4. El liberalismo político progresista ha sido desde el siglo XIX un fenómeno eminentemente intelectual de sectores medios. Como portadores convencidos de los principios libertarios e igualitarios de la Ilustración, estos sectores fueron sensibles a las condiciones de explotación y desigualdad capitalista que quedaron en evidencia debido a los procesos de conciencia, organización y lucha de la clase obrera. La influencia y el vínculo de estos intelectuales liberales progresistas sobre y con las prácticas políticas de la burguesía es desigual e inconstante,<sup>5</sup> y sus

<sup>4</sup> Ver las interesantes y polémicas reflexiones de Immanuel Wallerstein en *Utopística, o las opciones históricas del siglo XXI*, México. Siglo XXI Editores, 1998.

<sup>5</sup> Ver el sugerente libro de Crawford Brough Macpherson, *La democracia liberal y su época*, Madrid, Ed. Alianza, 1982.

coherencias o inconsistencias intelectuales han dependido de la radicalidad de su crítica al capitalismo como fuente de frustración de los principios ilustrados. Su coherencia intelectual y ética los acercó habitualmente a la izquierda.

5. La mayor o menor apertura a la participación política de los explotados admitida por la burguesía ha dependido de las condiciones históricas de la acumulación capitalista (de expansión o contracción), con sus diferencias temporales y espaciales; ellas explican las mayores o menores contradicciones entre el liberalismo económico y el liberalismo político. Y no está de más recordar que la burguesía no siempre apeló a sus modelos políticos liberales para ejercer la dominación.

6. El grado de legitimidad de las formas de dominación política de la burguesía ha sido siempre una expresión de las fuerzas relativas entre las clases, originadas en las contradicciones específicas en el plano económico-social, pero también en las fuerzas relativas en la disputa por la socialización de las representaciones de cada clase sobre lo que es la sociedad (y/o lo que se espera que sea), es decir, como disputa ideológica. El vigor histórico del liberalismo, más allá de los avatares de sus concreciones políticas, está, precisamente, en su función ideologizadora de la realidad, consagrada en la disociación conceptual entre los fenómenos socioeconómicos y los políticos, así como en su ahistoricismo y empirismo microsocioeconómico. Pero este vigor histórico no es una función del desarrollo de la democracia.

7. Los mayores desarrollos democráticos en el capitalismo, con la concomitante ampliación de las libertades y los derechos individuales postulados por el discurso liberal, han tenido lugar cuando el liberalismo ha estado en retirada como concepción burguesa de la organización económica y social. Ello ocurrió como resultado de un cambio en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, favorable a este último.

¿A qué llamamos liberalismo? Distingamos entre el discurso progresista con el que la burguesía se hizo del poder, y su naturaleza conservadora como dominación burguesa. Pero el discurso liberal mantuvo su eficacia ideológica porque logró convertir sus ficciones de carácter justificatorio en una teoría realista que "describe" a la sociedad capitalista como un mercado en el que poseedores jurídicamente libres tejen lo social en intercambios racionales maximizadores del beneficio individual, lo que los convierte en iguales. Es en el fetichismo de la representación liberal de la sociedad en el que se sustenta la fuerza ideológica del discurso. Su eficacia es inversamente proporcional a la fuerza intelectual y política de la crítica marxista del capitalismo.

Si hoy asistimos a la más contundente victoria histórica del liberalismo —que en América Latina es la primera— no es sólo por la derrota del trabajo, infligida por la contrarrevolución del capital, sino también porque, en sociedades desgarradas por la desigualdad social, la ficción ideológica liberal se ha socializado como sentido común, y lo que es peor, como ciencia social.

Los retrocesos actuales vienen a reforzar las confusiones teóricas que se fueron gestando en América Latina respecto al liberalismo. Existen razones históricas por las que cada vez que en nuestra región se piensa en el liberalismo sólo se

le asocia a las manifestaciones ilustradas y libertarias del discurso y no como proyecto político conservador de la burguesía en el poder. Ello es así porque en América Latina el liberalismo ha sido fundamentalmente un típico fenómeno intelectual de clase media, incluso previo a la constitución de la burguesía. Como proyecto político antioligárquico se realizó en alianzas de los sectores medios y populares que, si bien creó las condiciones para la gestación de una burguesía moderna local, en general no eliminó la impronta oligárquica del capitalismo latinoamericano. El Estado capitalista moderno que se configuró en los excepcionales triunfos políticos frente a la oligarquía, tampoco fue típicamente liberal. De ahí que el liberalismo político haya permanecido en el imaginario social como un movimiento progresista con metas inacabadas, por realizar. Esto explica también el azoro de buena parte del pensamiento crítico ante este liberalismo duro y puro, cuya sustancia conservadora aparece en esa crítica como adjetivo de una perversión inexplicable. El gran activismo ético de los críticos contrasta con su parálisis política, originada entre otras razones por la debilidad intelectual. La crítica a "este" liberalismo no es la crítica del liberalismo en tanto forma histórica del ejercicio de la dominación burguesa; se cuestiona a la "democracia realmente existente" pero no se hace la crítica histórica y política de la democracia liberal, que sigue apareciendo (sobre todo después de la crisis del llamado socialismo soviético) como la democracia en general.

### **Gobernabilidad: dominación conservadora**

El renacimiento liberal aparece como una necesidad urgente cuando la crisis del capitalismo, que estalla entre 1968 y 1973, hace incompatible la recuperación de las tasas de acumulación con la distribución del ingreso, con lo que el capitalismo central se había expandido. Liberar al capital implicó liquidar la fuerza relativa del trabajo, lo cual significó una recomposición profunda del poder.

Ser contemporáneo de la transformación de una época en otra tiene sus dificultades y sus ventajas. Las primeras consisten en que en las coyunturas no se ven con facilidad las tendencias de largo plazo. Pero hay ventajas porque se pueden percibir los cambios históricos como producto de acciones sociales concretas. Sin embargo, los análisis sobre las transformaciones vividas durante los últimos 25 años todavía oscilan entre las teorías conspirativas de lo micro y la metafísica de lo macro. El avance conservador no puede explicarse por conspiraciones particulares pues emana de las dinámicas propias de la reproducción capitalista, como *necesidad* sistémica y no como políticas coyunturales que puedan cambiar sin modificar la naturaleza del capitalismo en su fase histórica actual. Pero tampoco puede desconocerse que la reproducción del capitalismo sólo parece un fenómeno *natural* después que se fijan las relaciones sociales en correspondencia con esas *necesidades*. La gestación de las nuevas relaciones no tiene nada de natural, es producto de prácticas dominantes concretas, así como su aceptación requiere de ofensivas ideológicas específicas hasta lograr que el nuevo *ser* social se convierta en el *deber ser*. Sólo entonces "la



fuerza de los hechos" es una potencia ideológica que permite que la ideología dominante aparezca como realismo.

El triunfo liberal (o neoliberal) nada tiene de metafísico, porque la liberalización del capital es un hecho político, sin manos invisibles nacionales ni internacionales (la "globalización" es la ideologización del imperialismo convertida en realismo). Requirió del desmantelamiento gradual del Estado de Bienestar en los países centrales del capitalismo, y del terror de Estado en América Latina: a los trabajadores de los países dependientes las nuevas *necesidades* del capitalismo les representó y representa expropiaciones crecientes por partida triple: mediante la sobreexplotación del trabajo, con la redistribución negativa del ingreso en tanto consumidores individuales, y como deudores nacionales.<sup>6</sup> Sólo con una gran violencia estatal se podían frenar las resistencias populares en un continente surcado por luchas anticapitalistas y antimperialistas en ascenso.

Las ideas conservadoras de este neoliberalismo fueron producidas varias décadas antes de que las convirtieran en ideología dominante los intelectuales orgánicos del capitalismo que vieron con claridad que el periodo del Estado de Bienestar era "un momento anómalo"<sup>7</sup> del capitalismo, un mal necesario coyunturalmente pero que en una nueva crisis cíclica introduciría factores extraeconómicos que dificultarían una salida eficaz y eficiente de la misma. Las ideas conservadoras de liberales como Schumpeter, Von Hayek, Von Mises, Friedman y otros, tardaron varias décadas para imponerse (más en Europa<sup>8</sup> que en Estados Unidos) hasta que dieron el sustento ideológico para la recomposición de la dominación.

En 1975, la Comisión Trilateral<sup>9</sup> recogía estas ideas como bandera política al plantear el problema de la ingobernabilidad de la democracia en el Estado de Bienestar. En realidad, lo que se hacía ingobernable en la nueva etapa capitalista era una sociedad organizada sobre la base del reconocimiento público de los intereses organizados de los trabajadores, con incidencia no sólo en la distribución del ingreso sino también en la producción y las condiciones de trabajo; con un Estado mediador de conflictos clasistas incapaz de imponer una concepción única del orden social, función de control debilitada cuando los intereses del capital y del trabajo ya no convergían en torno a la expansión capitalista a cambio de beneficios sociales; una clase media educada acostumbrada a la movilidad social

<sup>6</sup> Fenómeno que planteó Ruy Mauro Marini en *Dialéctica de la Dependencia*, México, Ediciones Era, Serie Popular, 1973. Significativamente, en aquel momento parecía una argumentación extrema que no contemplaba matices sociales o contratendencias nacionales, pero resultó premonitoria.

<sup>7</sup> Eric Hobsbawm califica a los "años dorados" de la expansión de la posguerra como un periodo anómalo en la historia del capitalismo: el modelo de producción en masa sobre la base del consumo en masa no sólo es resultado económico de la "destrucción productiva" de la Segunda Guerra, sino porque la competencia más moral que económica con la Unión Soviética lleva a construir un modelo social atractivo para los sectores obreros sobre los que tienen gran influencia los partidos socialistas y comunistas; y también es anómalo por la apertura de la burguesía hegemónica y sus intelectuales hacia los problemas de la igualdad social. *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1995.

<sup>8</sup> Ver al respecto Claus Offe, *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, México, Alianza-Conaculta, 1990.

<sup>9</sup> Informe de la Comisión Trilateral. *La gobernabilidad de la democracia*, Cuadernos Semestrales del CIDE, núm. 2-3, México, 1977-1978.

ascendente; y partidos que fincaban su competencia electoral en sus compromisos de satisfacción de demandas que "irresponsablemente" se filtraban en el parlamento.

Para hacer compatible la democracia con la gobernabilidad, es decir, para impedir que la democracia interfiriera con los intereses capitalistas (ingobernabilidad), la Trilateral impulsó una transformación profunda de la sociedad para hacerla menos demandante, junto con un cambio en las relaciones políticas para reforzar el control sobre los conflictos que surgieran ante la negativa del sistema de convertir las demandas sociales en políticas públicas.

La identificación de la ingobernabilidad como crisis de autoridad (dominación) es coherente con la noción de "gobernabilidad" (*governability*) entendida como la estabilidad política que se obtiene con la obediencia de los gobernados. Que no es lo mismo que "gobernación" o "gubernamentalidad" (*governance*), que refiere a las técnicas, racionalidad y grados de gobierno. Dos órdenes de fenómenos vinculados pero que no son vinculantes. No es casual que en América Latina se les traduzca indistintamente como gobernabilidad, creando una confusión que diluye la connotación conservadora de la misma.

El problema de la gobernabilidad no es nuevo como tampoco lo es el de la dominación, sea ésta con legitimidad o no. Las dictaduras latinoamericanas construyeron la gobernabilidad que requería el neoliberalismo para imponerse. Cuando éstas dejaron de garantizar la estabilidad política, el problema de la gobernabilidad adoptó la forma de la democracia gobernable. Aunque por sí mismo el tema de la gobernabilidad tiene poca monta teórica más allá del problema del equilibrio, lo relevante son los procesos políticos e ideológicos que hacen posible que hoy se identifique gobernabilidad con democracia. Porque si la estabilidad de la dominación capitalista (gobernabilidad) se obtiene al impedir que la política intervenga sobre las cuestiones económicas —que quedan sólo reservadas a la soberanía del capital—, en países donde la desigualdad y la pobreza son la condición mayoritaria la búsqueda de gobernabilidad es más que una estrategia dominante conservadora, es francamente reaccionaria. Que la democracia pueda jugar ese papel de garante del *statu quo* y tenga legitimidad en sociedades como las latinoamericanas implica no sólo la transformación de la concepción que se tiene sobre la democracia, sino un cambio fundamental en la sociedad para transformar a sus actores políticos en funcionales al sistema.

En nuestra región, las estrategias de gobernabilidad han tenido un éxito indudable que nada tiene de metafísico. Por ello, además de la necesidad de desmascarar los actos de prestidigitación en que se convirtió la teoría para presentar la democracia como gobernabilidad, el estudio de ésta cobra sentido en tanto se reconstruyan las estrategias desplegadas para producir la estabilidad política en sociedades escindidas y con una potencialidad conflictiva enorme, lo cual remite al estudio de las relaciones dominantes-dominados, siempre concretas. Ahora me detendré en los cambios producidos en la sociedad que han originado las transformaciones políticas, mismas que analizaré en el siguiente apartado.

Tras los logros obtenidos a sangre y fuego, el éxito de las estrategias de gobernabilidad en América Latina desde los años ochentas radica en un conjunto de transformaciones sociales que por sí mismas disminuyen los obstáculos para el funcionamiento libre e impune del capital, a la par de haberlas presentado no sólo como un fenómeno inevitable sino también necesario para la expansión de la democracia, y por lo mismo, deseable.

Esto se ha hecho socializando una representación de la sociedad como mercado, como un agregado de individuos sólo vinculados por el intercambio de mercancías, que se realiza a precios fijados libremente por la oferta y la demanda. Como la libertad de la sociedad es la del mercado, ella se garantiza con el retiro de la intervención estatal en la regulación del mercado, lo que ocurre con la privatización de sus funciones económicas. Esta privatización produciría una dispersión del poder,<sup>10</sup> que se distribuiría horizontalmente entre la sumatoria de individuos que conforman la sociedad civil. Éstos, en sus múltiples relaciones individuales o microsociales, son tomadores de decisiones, ejercen el poder. Este es el fundamento de las *teorías pluralistas*, que afirman que la privatización económica es la esencia de la *modernización* que conduce a la libertad y a la democracia al crear múltiples poderes equivalentes (*poliarquía*<sup>11</sup>), no importando que entre esos tomadores de decisiones haya unos que deciden en todas partes y otros que no deciden nada, que son parias por doquier.

Además de llamar la atención sobre la falsedad del supuesto de que la privatización de las funciones estatales signifique una dispersión del poder en un mercado (sociedad civil) constituido por poderes tan disímiles como el trabajo y el capital, más aún en los grados de concentración y centralización actuales —que en lugar de socializar el poder lo concentran aún más—, hay que insistir en que esta representación de la "sociedad de mercado" no es sólo un artilugio ideológico liberal, sino que es un objetivo político a perseguir. La sociedad deseable para el neoliberalismo es la que ha dispersado a las clases y grupos sociales objetivamente contrarios al capital, que los ha disuelto en relaciones de competencia individualista, erigida en virtud libertaria. Las mínimas agregaciones sociales que un modelo de sociedad así puede contemplar son las de las interrelaciones primarias y a lo sumo los pequeños grupos de interés microgestores de bienes y servicios. Cada cierto tiempo, este poder ejercido "pluralmente" como sociedad civil se refiere al ámbito público como *sociedad política*, una sumatoria de ciudadanos aislados que eligen a sus gobernantes. Con esa activación periódica del mercado político se completaría la democracia.

Al pasar del nivel de las representaciones al de la realidad, se constata cómo la transformación de las relaciones económicas son el punto de partida para la constitución de una sociedad gobernable, pues originan conductas individualistas

<sup>10</sup> Milton Friedman, *Capitalismo y libertad* (1962), en Harold Beyer, "Selección de escritos políticos y económicos de Milton Friedman", en *Estudios Públicos*, núm. 60, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, 1995.

<sup>11</sup> Robert Dahl, *La poliarquía. Participación y oposición* (1971), México, Red Editorial Iberoamericana, 1993; y *La democracia y sus críticos* (1989), México, Paidós, 1992.

y conservadoras en los conglomerados populares, que reducen la emergencia de acciones colectivas y la capacidad de cuestionamientos reales al orden de desigualdad. La liberalización del mercado de trabajo ("flexibilización laboral"), que libra al capital de las limitaciones jurídicas conquistadas por las luchas sociales, hace crecer la competencia entre los trabajadores (incluso regionalmente), aumenta su disposición a la desvalorización de la fuerza de trabajo y su subordinación al capital para conservar la fuente de empleo; se individualiza la negociación salarial debilitando la influencia sindical. El desempleo arroja a vastos sectores hacia formas alternativas de sobrevivencia individualizada (común y mal llamadas "sector informal"), que desvalorizan la fuerza de trabajo familiar, sin espacios colectivos para su defensa y sin capacidad para ejercer presión sobre el Estado, con lo que se producen regresiones en sus experiencias y grados de conciencia clasista, y una creciente marginalidad política. Los sectores medios se estratifican, con fracciones satélites del capitalismo especulativo muy conservadoras, y los expulsados de la actividad estatal, debido a su calificación poco flexible para la reinserción laboral, sufren profundos desajustes psicológicos, tendencias al ostracismo y al individualismo. La imposición de pautas de consumo suntuario (con el abaratamiento de muchos productos) induce a los sectores empobrecidos a consumirlos provocando un desplazamiento adicional de sus necesidades básicas (calidad alimenticia, salud, vivienda, educación, información), lo que aumenta su condición dependiente y marginal y da lugar a las actividades económicas especulativas y parasitarias.

El desempleo y la pobreza incrementan las conductas delictivas de los pobres y con ello la percepción de inseguridad, haciendo a la sociedad más proclive a formas de privatización de las acciones coercitivas y más permisiva con las prácticas autoritarias. Dentro de ciertos límites manejables, la anomia social facilita el control. Los factores y valores de expulsión se refuerzan sobre todo entre los jóvenes y los trabajadores calificados desempleados (probablemente de mayor experiencia y conciencia previas), cuya emigración actúa como válvula de escape a las insatisfacciones sociales.

Aunque estas transformaciones sociales disminuyeron los niveles de conflictividad durante varios años, la polarización de la estratificación social no permite su contención absoluta. Las estrategias de gobernabilidad se orientan a aislar los conflictos tratándolos como particularidades (étnicos, religiosos, generacionales o de género, entre otros), y explotando su especificidad para impedir que se articulen en una noción de lo popular. El tratamiento diferenciado va desde cooptaciones y programas focalizados, hasta represiones abiertas. Las agregaciones microsociales (comunitarias, barriales) son manipuladas para reforzar prácticas clientelísticas sin mayor alcance en cuestionamientos de tipo sistémico, en lo que puede radicar la funcionalidad de lo "local" para la gobernabilidad conservadora.<sup>12</sup> Y en ese mis-

<sup>12</sup> Para un análisis de la relación entre lo local y la gobernabilidad, ver Beatriz Stolowicz, "La izquierda, el gobierno y la política. Algunas reflexiones", en Beatriz Stolowicz (coordinadora). *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco/Plaza y Valdés Eds., 1999.



mo plano de la *deseabilidad dispersiva* se encuentran las organizaciones no gubernamentales, unidades preferenciales de la poliarquía. Aunque muchas de las que así se denominan son en realidad movimientos sociales, la renuncia a identificarlos como tales habla de la influencia ideológica del liberalismo.

La sumisión, la resignación, el egoísmo y la pasividad no son sólo consecuencias de estas transformaciones sociales, sino también valores promovidos para reproducir esos cambios. El bienestar sustituido por la posesión (aunque sólo sea de la propia persona); los derechos sociales sustituidos por el consumo de servicios; el desarrollo humano transformado en competencia fagocitaria: "excelencia"; el temor ante el futuro incierto convertido en pragmatismo conservador. Estos son los valores de la llamada "posmodernidad", supuesto virtuosismo cultural que defienden y reproducen vastos sectores de intelectuales, ahora orgánicos de la dominación conservadora, para lo cual sólo tienen utilidad las universidades públicas aparte de operar institucionalmente como mecanismos de control social y político de sus propias comunidades. El valor de la desigualdad como el factor más dinámico del desarrollo social es la consagración del liberalismo como pensamiento de derecha.

La *sociedad de la inseguridad* sirve como bandera de la derecha para ganar elecciones y para revivir las teorías políticas del individualismo posesivo en clave hobbesiana,<sup>13</sup> para hacer del Estado muy poco más que el guardián de la propiedad. La reforma neoliberal del Estado se legitima porque su "minimización" conduciría a la modernización social y política y a mayor democracia. Que en realidad el Estado sólo sea mínimo en sus responsabilidades sociales y se maximice en su intervención a favor del capital, es una de las tantas desmitificaciones de los supuestos liberales que necesitan hacerse, incluso para rescatar a los espíritus honestamente democráticos que han sucumbido a ellos al considerarlos "alternativa" a los autoritarismos corporativizados.

### **La democracia gobernable**

Desde la lógica funcionalista, lo que los subsistemas económico, social y cultural no alcancen a producir en materia de gobernabilidad, debe ser completado por el de la política, cuya función primordial es impedir desequilibrios entre lo que se demanda al sistema (*inputs*) y lo que éste ofrece a través del Estado como políticas públicas (*outputs*). Esta concepción del sistema político tampoco es novedosa; lo es, en cambio, la exacerbación de los contenidos conservadores de la política en sociedades en las que el sistema, es decir el capital, nada está dispuesto a dar frente a la magnitud inédita de necesidades insatisfechas. Y cambia de manera radical el carácter de la representación política, pues ésta no puede traducir intereses en demandas, lo que asigna a los partidos una función primordial de con-

<sup>13</sup> Thomas Hobbes, *Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil* (1651), México, Fondo de Cultura Económica, 1987. Además, C. B. Macpherson, *La teoría política del individualismo posesivo* (1962), Barcelona, Fontanella, 1979.

trol político sobre el desborde conflictivo que la miseria produce en América Latina, a pesar de las transformaciones analizadas anteriormente.

El modelo de democracia representativa (liberal), que se ajusta al objetivo conservador de liberar a la economía de las intervenciones políticas, es uno de los tantos aportes de los intelectuales liberales conservadores en la década de los cuarenta. La democracia deja de ser el espacio de procesamiento legal y legítimo de intereses sociales diversos, como incluso algunos liberales progresistas llegaron a entenderla, para reducirse sólo a un método de formación de gobierno y de administración<sup>14</sup> de las relaciones políticas.

Los ciudadanos sólo participan para elegir al reducido grupo de líderes que tomarán las decisiones por la ciudadanía, delegando en ellos la soberanía. La opinión de los ciudadanos sobre las decisiones tomadas por las élites podrán ser emitidas como aval o rechazo al reelegirlas o cambiarlas en cada acto electoral, único momento en que los ciudadanos recuperan la soberanía.

Las élites políticas construyen los equilibrios mediante consensos entre sí, que es la única forma que puede adoptar la política democrática, consensos hacia los intereses dominantes y no confrontación de proyectos de sociedad distintos. Porque no hay alternancia de proyectos, los consensos presuponen acuerdos estructurales básicos que incluyen naturalmente la convicción de que los asuntos económicos son privativos del mercado. Al existir esos consensos básicos, las diferencias nada más pueden ser de carácter procedimental y sólo en esa medida las diferencias son negociables, concertables.

En suma, los partidos se limitan a ser la instancia de reclutamiento de las élites. El reclutamiento se realiza a través del juego de la oferta y la demanda, con los atributos de libertad de todo mercado: oferentes en libre competencia y consumidores también libres, igualados solamente en la posesión de la ciudadanía. El mercado político es perfectible con reformas electorales, sin que ello modifique la naturaleza de su funcionamiento. La política es *marketing* periódico y concertación, fuera de los tiempos de la competencia allí se acaba el asunto de la política.

Este modelo de democracia liberal sintetiza tres tipos de visiones conservadoras que fueron acuñándose desde finales del siglo XIX: a) el rechazo al principio de soberanía popular, frente a los riesgos que ésta implica para la dominación del capital tras la consagración del sufragio universal;<sup>15</sup> b) las teorías sobre las élites, que a partir de la descripción de las prácticas políticas de los sistemas parlamentaristas<sup>16</sup> los convierten en preceptos normativos debido a su eficacia en el control político, y c) el balance positivo que hacen los conservadores del impacto del parlamentarismo sobre los grandes partidos obreros (como el inglés y el alemán desde finales del siglo XIX), como medio que los integra al sistema y

<sup>14</sup> Friedrich von Hayek, *Camino de servidumbre* (1944), Madrid, Alianza, 1990.

<sup>15</sup> Ver, por ejemplo, de Gaetano Mosca, *La clase política* (1923), México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

<sup>16</sup> Robert Michels, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* (1925), Buenos Aires, Amorrortu, 1996.

desnaturaliza sus objetivos de cambio radical anticapitalista. Esta síntesis de visiones antiliberales se refuncionaliza en el liberalismo conservador de nuevo tipo, cuya formulación más clara la hace Joseph Schumpeter, un economista.<sup>17</sup> Macpherson la denomina modelo de *democracia pluralista elitista de equilibrio*,<sup>18</sup> que se convertirá en el modelo de democracia liberal en general.<sup>19</sup>

Este es un modelo político para producir gobernabilidad, lo cual explica que en las perspectivas conservadoras se identifique gobernabilidad con democracia. Esta identificación también la hacen muchos de los críticos del neoliberalismo, no sólo en términos nominales, sino también conceptuales: ven en cada conflicto un riesgo para la democracia, porque también la identifican con equilibrio. Las visiones hegemónicas actuales son una regresión, incluso, a perspectivas liberales como las de Lipset,<sup>20</sup> quien reconocía la democracia política como la forma regulada de procesar el cambio social, es decir, que la estabilidad no se mide por la ausencia de conflictos sino por la capacidad para procesarlos institucionalmente, lo que implica reconocer la legitimidad de la representación de los distintos intereses existentes en la sociedad. Naturalmente, las visiones de un liberalismo más democrático son sustituidas por las de un liberalismo muy conservador. Pero hasta el mismo Schumpeter advertía que el "método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social".<sup>21</sup>

¿Por qué en América Latina se impone este modelo de democracia, desde los años ochentas, cuando la lucha contra las dictaduras y contra el autoritarismo civil ha tenido como protagonistas centrales a los movimientos populares y de izquierda? Hay una explicación en la naturaleza de la transición, que no supone la derrota de la derecha militar y civil aunque le obliga a un *aggiornamento* político al sustituir la represión abierta por la negociación para mantener la gobernabilidad. Con ese fin se acuñó —con el concurso de muchos intelectuales— la lógica de las *dos transiciones*: primero la transición política que daría la estabilidad necesaria para el crecimiento económico; segundo, este crecimiento económico por "derrama" permitiría iniciar, en un momento indefinido, la segunda transición hacia la "democracia social".

Ciertamente, en los primeros años hubo resistencia popular a la separación entre democracia y bienestar social, aunque fue progresivamente eliminada con las transformaciones descritas arriba; pero también se dio una gran predisposición para aceptar esas nuevas reglas del juego político debido al trauma social sufrido con el terrorismo dictatorial. Los chantajes permanentes sobre la posibilidad de recurrencias autoritarias, que fueron institucionalizados con las amnistías e

<sup>17</sup> Joseph A. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942). Buenos Aires, Ed. Folio, 1972.

<sup>18</sup> Crawford B. Macpherson, *La democracia liberal y su época*, op. cit.

<sup>19</sup> Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia* (1988). México, Alianza, 1991. Dos tomos.

<sup>20</sup> Seymour Martin Lipset, *El hombre político. Las bases sociales de la política* (1959), México, Rei, 1993.

<sup>21</sup> J. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia*, op. cit., p. 378.

impunidad a las fuerzas represivas, orillaron a la población a subordinar sus aspiraciones de igualdad a la conservación de la libertad. Y éste ha sido un método recurrente para neutralizar rechazos y conflictos.

Pero como la política es un fenómeno relacional, una parte central de la explicación radica en las prácticas y concepciones políticas de los partidos de izquierda. Como es comprensible, el sólo hecho de recuperar las libertades públicas y privadas fue un logro democrático trascendente, vital, que explica la subsunción inicial de toda consideración crítica acerca de las formas y contenidos de la democracia; en particular esto pesó mucho en las dirigencias de izquierda, que después de haber sido el objeto central del terror de Estado, fueron muy sensibles a la percepción de ser tratados como pares en el sistema político. Ello no justifica, empero, que el cambio de su situación fuera procesado con un sentido autorreferido que terminó, en muchos casos, en irresponsabilidad social y política: falta total de crítica sobre las reglas del juego que se le impusieron como condición para su incorporación al sistema político; confusión sobre el alcance de cada conquista de espacios institucionales que, siendo muchas veces para los grupos dirigentes, se percibieron e hicieron percibir como avances del pueblo. La izquierda nunca entendió que esas reglas del juego exigían la transformación de sus liderazgos (de amplio reconocimiento social) en conducta elitista, es decir, que desde entonces pasarían a formar parte de los pequeños grupos de líderes políticos que deciden por sí y ante sí en nombre de la sociedad.

La izquierda sucumbió a estas prácticas debido a sus propias debilidades conceptuales, entre las que podemos mencionar la incompreensión de la diferencia que hay entre una izquierda que actúa en el parlamento y una izquierda parlamentarista, o dicho de otro modo, entre ser la izquierda en el sistema o la izquierda del sistema. Pero también porque sucumbió a la coerción chantajista de la derecha que sancionó como "bloqueos a la democracia" todo aquello que no implicara un consenso en torno a sus propios intereses, al tiempo que llevó a cabo cooptaciones elitistas vía privilegios, a las que fueron sensibles muchos políticos de izquierda.

La adopción de esas visiones y conductas políticas fue haciéndose más evidente conforme la izquierda creció electoralmente en la década de los noventas, coyuntura histórica que no supo interpretar. El impacto social de la segunda generación de ajustes neoliberales —más profundos que los de las dictaduras en términos de empobrecimiento social, y más permanentes por su institucionalización con la reforma del Estado—, conmovió a una población desarmada para su defensa clasista frente al capital, que buscó el cambio por la vía electoral votando por la izquierda.

Por primera vez la izquierda llega a gobernar<sup>22</sup> en numerosos municipios, incluidas varias capitales, con lo cual ingresa a un escenario inédito y muy contra-

<sup>22</sup> Analizo estas experiencias en "La izquierda, el gobierno y la política. Algunas reflexiones", en el citado libro *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*, en el que se tratan los casos de Chile, Uruguay, Brasil, El Salvador, Venezuela, México y Cuba. Las tendencias generales que se analizan contemplan las diferencias y matices de cada país, la naturaleza de la



dictorio en el que los partidos quedan disociados entre un parlamentarismo tradicional y un accionar innovador comprometido con la gente y sus problemas. Éstas son experiencias muy positivas en términos de democratización de las relaciones gobernantes-gobernados, de contenidos sociales de las gestiones, y de esfuerzos para promover la participación colectiva (al mismo tiempo que ésta es desalentada por los partidos). Con diferentes grados de avance y consolidación, estas gestiones producen mejorías en la calidad de vida urbana y en los servicios sociales, aunque, por sus esferas de competencia, los cambios producidos a nivel local no llegan a modificar los problemas socioeconómicos fundamentales de una población que sigue empobreciéndose. Aunque son procesos de avance democratizador de indudable importancia por su potencialidad para la recomposición relacional y valórica del tejido social y de la fuerza política popular, están limitados por el desempeño político de los partidos, en una suerte de contradicción perversa: para profundizar los cambios iniciados como gobiernos se necesita seguir ganando elecciones, y para lograrlo la izquierda sucumbe a las prácticas de la política como mercado, lo que conlleva su desperfilamiento programático y una proclividad a sofocar las luchas populares para evitar que deriven en conflictos. El objetivo de ganar fuerza electoral bajo esas reglas del juego le produce pérdidas de fuerza social y política real, lo que en ocasiones le lleva a perder lo conquistado como fuerza electoral o, en el mejor de los casos, le impone techos a su crecimiento.

La mimetización de la izquierda como partido sistémico, y la constatación de que una mayor presencia en los ámbitos institucionales (gobiernos, parlamento) no conduce a mejorar las condiciones de vida, provoca el desencanto de vastos sectores populares hacia la política institucionalizada, que se manifiesta no en apatía sino en rechazo activo, lo que incluye juicios muy críticos a los partidos de izquierda con representación electoral.

Entre la frustración y las expectativas de cambio coyunturales, el sistema representativo tiene una credibilidad variable, pero con una franca tendencia al declive. Son los signos críticos de la democracia gobernable.

### **La crisis de la democracia gobernable**

Los primeros en advertir un escenario de crisis fueron los sectores dominantes, a mediados de la década pasada. El primer síntoma de que el modelo político tenía problemas es el rechazo a los partidos de derecha mediante la opción electoral por la izquierda. El abstencionismo electoral, que en América Latina fue menor al promedio del 50 por ciento y que es el producto funcional de las estrategias de gobernabilidad, sólo se abate cuando la izquierda aparece como opción, dando lugar al peligroso juego de exclusión social con inclusión electoral.

fuerza política y electoral de cada uno, las historias nacionales y estatales, el desarrollo orgánico y político de cada partido, etcétera. Las especificidades no afectan las generalizaciones, lo que dice de la fuerza de penetración de estos cambios en concepciones y conductas.

Para recomponer la imagen de sus gobiernos y partidos,<sup>23</sup> la derecha trata de compensar el desprestigio de las "instituciones democráticas" con acciones puntuales contra la corrupción y el "crimen organizado" encarcelando a varios políticos y a uno que otro oficial del ejército (el uso patrimonial del Estado que requiere el neoliberalismo es obviamente la causa, aunque es intocable); también se hacen algunas reformas al Poder Judicial para reforzar su imagen de independencia.

Pero el desprestigio de la política y las instituciones corre paralelo al de las políticas económicas, siendo más bien estas últimas las que caracterizan la crítica creciente al neoliberalismo (hay más críticas al modelo económico que al modelo político), que se expresan en los debates como necesidad de alternativas.

Para enfrentar el desprestigio del "modelo", la derecha exhibe una notable iniciativa para elaborar un discurso renovado con el que trata de apropiarse de las críticas al neoliberalismo, de modo de refuncionalizarlas como aceptación al capitalismo. Con ese fin crea nuevos "centros de opinión" (*think tanks*)<sup>24</sup> para vanguardizar las "alternativas", que aparecen cuestionando los excesos del mercado y su incapacidad para resolver las "externalidades" que produce, como la pobreza, a partir de lo cual convoca a una participación más activa del Estado en políticas focalizadas para combatirla. Para esas políticas, *lo local* y las ONG son espacios y herramientas privilegiadas.<sup>25</sup> Los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y hasta la misma OCDE) dedican sus informes a convertir estas "inquietudes" en recomendaciones oficiales.<sup>26</sup> Todo ello con el concurso permanente de la socialdemocracia europea: primero la española y luego la inglesa que le da forma de programa político con su Tercera Vía.<sup>27</sup> Más recientemente, economistas y juristas conforman la corriente del *neoinstitucionalismo*,<sup>28</sup> que propone reformas a las instituciones formales e informales para garantizar el buen funcionamiento del mercado sin modificar las políticas macroeconómicas.

Otro signo de crisis sobre el que advierte la derecha es lo que denomina "el crecimiento de la democracia antiliberal", o lo que algunos intelectuales han llamado las "democracias delegativas", en alusión a nuevos caudillismos políticos que diluyen el papel del sistema de partidos. Esta alternativa sería inadmisibles pues,

<sup>23</sup> Recomposición diagnosticada en varias de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes y Jefes de Gobierno, como la de Viña del Mar (Chile) en 1996 y la de la Isla Margarita (Venezuela) en 1997.

<sup>24</sup> En 1996 se crea el *Círculo Montevideo* y aparecen varios grupos de expresidentes e intelectuales latinoamericanos trabajando en este sentido.

<sup>25</sup> Ver, por ejemplo, el informe de la Primera Conferencia Interamericana de Alcaldes "Camino para el desarrollo de la gobernación municipal", convocada por el BM, la OEA, el BID y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), en noviembre de 1994.

<sup>26</sup> Sólo por citar uno de entre tantísimos, mencionemos el último de la OCDE, *Desarrollo más allá de la economía. Informe 2000. Progreso económico y social en América Latina*.

<sup>27</sup> Ver Anthony Giddens, *La Tercera Vía*, México, Oikos, 1997.

<sup>28</sup> Ver, entre otros, René Villarreal, "Hacia una economía institucional de mercado", y Pieder Könz, "Estado de derecho para el desarrollo sostenible: reflexiones sobre la brecha institucional latinoamericana", publicados por el boletín electrónico del Instituto de Investigaciones sobre la Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, julio de 2000.

según los ideólogos de la gobernabilidad, las élites partidarias deben ser las únicas depositarias de la delegación de las decisiones. Como se sabe, las alharacas a propósito de la reelección de Alberto Fujimori en Perú se esfumaron tan pronto como demostró que su fundamentalismo era neoliberal y pronorteamericano, lo mismo que sucedió con Carlos Menem en Argentina. En realidad, fue el ascenso político y la elección de Hugo Chávez en Venezuela lo que desató las más furibundas diatribas de la derecha, pues no sólo se desestructura el sistema tradicional de partidos, sino que se hace con un proyecto social y político antineoliberal. No es la institucionalidad representativa la que realmente les preocupa —que en Venezuela se consagra en la nueva Constitución— sino que la representación política reintegre la dimensión económico-social.

En años recientes hay un cambio cualitativo en la crisis de la democracia gobernable: el modelo político es cada vez más ineficaz como instrumento de control sobre la recomposición sostenida de las luchas populares que se observa actualmente en todos los países. Lo que comenzó como crisis de credibilidad, empieza a ser percibido como crisis de dominación. Un indicador de esto es el recurso cada vez más frecuente a la represión abierta como mecanismo de gobernabilidad.

Puede parecer extraño que sea ahora cuando la derecha perciba riesgos a su dominación, mayores que cuando la izquierda empezó a conquistar gobiernos. Pero es comprensible a la luz de los efectos contradictorios que tuvieron los triunfos electorales de la izquierda. Obviamente, significaron una pérdida política para la derecha al reducirle los espacios e instrumentos de patrimonialismo estatal, necesario tanto para el mantenimiento de privilegios económicos como para la cohesión clientelar de sus apoyos. Por ello, reacciona con vehemencia con todo tipo de bloqueos financieros, políticos e institucionales, y arremete con estructuras corporativas mafiosas contra los gobiernos de izquierda, cuya resistencia y logros en estas parcelas estatales son una verdadera hazaña.

Sin embargo, el peligro de avance de la izquierda disminuye si ésta funciona bajo las reglas del juego del sistema —como ha ocurrido—, o si su gestión gubernamental se concreta a ser una administración honesta y eficiente. Porque ello no es condición suficiente para que esas cualidades se proyecten en una mayor fuerza política, lo que depende de todo su accionar político. Se equivoca el estructural-funcionalismo cuando establece una correlación mecánica entre eficiencia y legitimidad. De hecho, en todos los países donde gobierna la izquierda, gestiones honestas y eficientes no fueron suficientes para generar la fuerza necesaria para enfrentar las políticas económicas y sociales más regresivas, y sus logros no siempre pudieron contrarrestar los rechazos políticos cosechados por el tradicionalismo de sus partidos; tampoco han garantizado fuerza electoral, que se ha perdido o se ha topado con techos para su crecimiento.

Para la derecha, lo más preocupante es que la integración de la izquierda al sistema no redunde en el control de los conflictos sociales. Muchas de las luchas populares emergen hoy al margen de la convocatoria política de los partidos de izquierda, e incluso en reacción contra ellos debido a sus prácticas políticas. Em-

pieza a configurarse una izquierda no partidaria con bastante capacidad de convocatoria social, que está por fuera de la influencia del liderazgo político de los partidos, aunque en esas luchas participan muchos de sus militantes de base. Son un factor importante de enfrentamiento a los intereses dominantes, aunque debe señalarse que la enorme energía social puesta en movimiento en la región todavía no logra condensarse en una fuerza política de magnitud equivalente, por los grados de dispersión que aún existen entre muchas de ellas y por la falta de articulación de esas luchas con las de los partidos. No obstante esas deficiencias, la recomposición popular es un proceso innegable y ascendente. Son luchas estudiantiles en defensa de la Universidad pública como en México, Brasil, Argentina, El Salvador o Nicaragua; que se vinculan con las de pobladores y trabajadores contra la privatización de los recursos naturales como en Cochabamba (Bolivia), Costa Rica y El Salvador; o con las de los empleados públicos y otros sindicatos como en Brasil, Colombia, República Dominicana y Uruguay; de desempleados junto a pobladores como las de varias provincias argentinas; luchas de asalariados rurales y campesinos como en Brasil, Bolivia, Paraguay y Honduras; movimientos indígenas como en México, Ecuador y Chile; movimientos por la soberanía territorial como Vieques (Puerto Rico) y Panamá. Son acciones que empiezan a vincularse continentalmente, como el movimiento que se está gestando contra la agresión imperialista del *Plan Colombia* o como el Grito de los Excluidos; algunas tienen proyección internacional como las de los sindicatos de empresas transnacionales, o como las de los trabajadores de las maquiladoras nicaragüenses con la Federación Mundial de Sindicatos Textiles y, en una dimensión más amplia, con movimientos de los países centrales como los de Seattle, Washington, Davos y Praga, contra los organismos financieros internacionales.

El nuevo escenario transforma las estrategias de gobernabilidad de la derecha. Las prácticas de control con legitimidad por medio de la democracia gobernable van siendo desplazadas por la represión directa, con el ejército y la policía en la calle. Pero también se reprime por medio de la institucionalidad, con un papel destacado del poder judicial, en lo que se ha denominado la *judicialización de la represión*. A los estudiantes en huelga se les reprime bajo cargos de *despojo de bienes públicos y peligrosidad social*, como ocurrió con el Consejo General de Huelga de la UNAM en México, y se pretende hacerlo en este momento como *despojo* contra los estudiantes secundarios en Uruguay. Se les imputa el delito de *turbación de la posesión* a los desempleados de Mar del Plata (Argentina) que hacen un plantón en la Catedral, y también se tipifica como *despojo*, el movimiento de las enfermeras en la plaza principal de la ciudad de Monterrey (México). A las huelgas sindicales se les derrota poniéndolas fuera de la ley, como a la de la Volkswagen de México, y también con el concurso judicial se ha buscado desarmar la lucha de los Sin Tierra en Brasil. Son *atentados al orden público* las manifestaciones callejeras, y *asonadas* los bloqueos de carreteras.

Que el Estado de derecho sea utilizado como arma de represión y para excluir del espacio público a los sectores populares, no debe llamar a sorpresa. Atribuir a priori al Estado de derecho una moralidad de justicia es caer en la lógica del



derecho natural. Toda legalidad que se aplica como obligación civil es Estado de derecho, aunque sea profundamente autoritaria y socialmente injusta, y por lo tanto, como todas las prácticas institucionales, debe ser un objetivo de transformación democrática. Que ese proceso pase por exigir el cumplimiento de las libertades y derechos públicos e individuales a que se han visto obligadas a reconocer las Constituciones liberales para universalizar una dominación particularista (lo cual ha ocurrido siempre que los desiguales han reclamado), es parte de la dialéctica de la lucha política.

### **Perspectivas y desafíos**

Lo primero que salta a la vista es cuán poco le duró el *aggiornamento* político a la derecha. Basta comparar los discursos de algunos de sus personajes para ver cómo vuelven por sus fueros: los *enemigos* convertidos en *adversarios* de nuevo son *enemigos*. No son veleidades ni falta de "voluntad política", es su conciencia capitalista dominante. La democracia liberal sirve si da estabilidad política a los intereses capitalistas, que en América Latina quiere decir explotación y ganancias salvajes. Si no, es un instrumento desechable. Y ésta no es una constatación de última hora, es una historia tan antigua como el liberalismo y la contradicción entre capitalismo y democracia.

Como ha sido siempre, la democracia es una conquista y una construcción popular. A la izquierda latinoamericana le ha faltado una visión madura y dialéctica para enfrentar la muy compleja relación entre *institucionalidad* y *cambio*. Si las instituciones de la democracia liberal le han permitido una acción política con resguardo legal, lo que abre un conjunto de posibilidades para su desarrollo, también la constriñen a una legalidad y a unas reglas del juego que obstaculizan el cambio, pero que quedan legitimados con la propia participación de la izquierda en esos ámbitos institucionales. Simultáneamente, en cuanto esas mismas instituciones hacen de las libertades individuales y públicas un derecho jurídico que debe preservarse, para hacerlo se debe confrontar a quienes para mantener los privilegios reconocidos legalmente están dispuestos a negar esa legalidad.

La disyuntiva no está entre resignarse a participar en las instituciones bajo sus reglas del juego y quedar integrado al sistema, o negar toda participación institucional. Se debe participar en las instituciones, porque si no existen las condiciones históricas para negarlas y construir otras con fines y propósitos realmente emancipatorios, es necesario tratar de transformarlas en su existencia actual, pero tomando en cuenta lo que decía Gramsci: "Si se admite que con cualquier actitud que se adopte se le hace siempre el juego a alguien, lo importante es buscar por todos los medios de hacer bien el propio juego, esto es, de vencer netamente".<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Antonio Gramsci. "El partido político", en A. Gramsci. *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*. México, Juan Pablos Eds., 1975, p. 50.

"Hacer bien el juego de uno" comienza por comprender que la política no se origina en las instituciones, sino que por el contrario, ellas la expresan y la reproducen, son una resultante de fuerzas. Del mismo modo que son una expresión de fuerza política los valores que amalgaman a las instituciones. Darle una direccionalidad democratizadora a la práctica institucional, reformarla en un sentido democrático, requiere fuerza. Y lo sustantivo de esta fuerza se genera fuera de las instituciones formales de la democracia representativa, aunque desde allí pueda reforzarse.

Es esa construcción de la fuerza política necesaria para democratizar nuestros países lo que da sustancia a la noción de democracia como medio. La transformación institucional es, al mismo tiempo, la transformación de las relaciones sociales y políticas que le dan origen. Dicho de otro modo, la lucha por la democracia es una lucha de poder en todos los ámbitos donde éste se origina, se ejerce y reproduce: en la contradicción capital-trabajo; en las configuraciones, las prácticas y los fines de las instituciones del Estado, entre las que se incluyen las que, por medios formales y no formales, procesan las relaciones políticas como fenómeno público (sistema político); en los ámbitos de creación y socialización de ideas y valores que condicionan las conductas sociales, con sus instituciones formales y no formales, que van desde las educativas, la producción teórica y artística, los medios de difusión y las iglesias, y hasta las mismas prácticas económico-sociales que poseen una función ideológica fundamental. La lucha democrática en todos estos ámbitos e instituciones adopta formas específicas como lucha política, pero no están escindidas. No entenderlo así es un signo de subalteridad. En esa comprensión, la derecha lleva mucha ventaja.

La izquierda ha conquistado mayores espacios para influir democráticamente desde las instituciones, hecho enormemente positivo. La fuerza electoral de la izquierda, sin embargo, no es equivalente a su fuerza política, y éste es también su desafío para convertir los espacios institucionales en escenario para el cambio; esto sólo es posible si se confronta a la derecha y se mina su fuerza, también, incluso, para defender a las instituciones representativas de sus reacciones liquidacionistas.

Cualquier avance realmente democrático hace presumible escenarios cada vez más conflictivos y respuestas represivas. Si por evitar estas reacciones no se enfrenta a la derecha, la violencia de todos modos estallará como efecto de la desesperación de la gente ante la violencia cotidiana a que está sometida con su miseria. Lo único que puede disminuir la violencia antidemocrática de los dominantes y preservar los espacios de libertades conquistados para avanzar sobre otros, es la fuerza con que cuenta el pueblo. No es una disyuntiva entre pesimismo u optimismo, es el único realismo posible.

En América Latina, éstos son hoy los términos de la disputa democrática, como fin y como instrumento de cambio opuesto al instrumentalismo conservador dominante: un proyecto de poder, de gestación de fuerzas sociales y políticas para construir igualdad social. Un proyecto democrático supone claridad analítica

y construcciones sociales; no se empieza de cero, existe una enorme potencialidad, pero para ser transformada en realidad acusa demasiadas insuficiencias en ambos requisitos. Estos son los retos actuales de la izquierda, si ésta es coherente con su papel histórico de fuerza emancipadora.